

Megatoma de San Antonio: el complejo rumbo de las negociaciones

El acuerdo de confidencialidad firmado por las partes para evitar filtraciones no ha impedido que se conozca el escaso avance de las tratativas a dos meses de iniciadas las conversaciones y los reparos de los dueños del terreno para incorporar a los representantes de los pobladores a la discusión.

Por Maximiliano Estrada



► Los terrenos ocupados en San Antonio abarcan 260 hectáreas.

Hermetismo de las tratativas

Hasta ahora las reuniones entre el Minvu y los representantes de los propietarios se mantienen en completo hermetismo, luego de que hace dos semanas se firmara un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

El grupo negociador está compuesto por la delegada ministerial para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, quien lidera el equipo técnico del gobierno, acompañada por dos abogados del Minvu. La contraparte, en tanto, está

integrada por el abogado Diego Pereira-Fonfach, otro abogado y un economista.

En paralelo, Maira es la encargada de sostener encuentros semanales con los dirigentes de la toma, pero sin entregar mayores detalles sobre el curso de las negociaciones del terreno.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien fue clave para abrir la negociación en marzo, ha tomado distancia del proceso.

La lentitud de las tratativas ha puesto en riesgo -según confi-

dencian participantes- la posibilidad de llegar a buen puerto antes de agosto, cuando expira el plazo judicial. El fallo de la corte establece un desalojo "razonado y paulatino" si no se logra una salida negociada.

En estas semanas también se ha afianzado la convicción de las autoridades respecto a que los dueños del terreno estén interesados en estirar la negociación para llegar al próximo gobierno, buscando una autoridad más flexible o condiciones más ventajosas para

vender.

En el Minvu está zanjado que no habrá expropiación del terreno y que tampoco hay disponibilidad a adquirir directamente el paño como han propuesto desde los empresarios. La línea oficial sigue siendo que sean las cooperativas las que compren colectivamente la tierra, con apoyo técnico.

Hasta ahora, según detallan en el ministerio, se han formalizado 40 cooperativas, que agrupan a un total de 3.718 familias del campamento. Algunas incluso han sido inscritas en el Diario Oficial, lo que permite avanzar en el proceso de adquisición.

Sin embargo, al menos 418 familias aún no han ingresado a ninguna cooperativa, sea por desconfianza, desconocimiento o dificultades administrativas. Ese desfase preocupa, ya que el modelo de compra colectiva avanza en paralelo a la negociación con los empresarios.

¿Y el plan B?

Si la negociación no prospera, el escenario vuelve a estar marcado por una orden de desalojo vigente.

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso afirman que "como gobierno esperamos que se pueda lograr un acuerdo en esta materia, ya que representa una solución innovadora, sin precedentes".

Sin embargo, ante la posibilidad de que no se acuerde una solución, en la citada delegación señalan que "como se ha sostenido previamente, se velará por el respeto a las sentencias judiciales, retomando la mesa de coordinación intersectorial en materia de desalojos, convocando al municipio y carteras competentes, para evitar la prolongación de la ocupación ilegal, como mandata la corte".

El eventual desalojo -que implicaría el retiro de más de 10 mil personas- ha sido tema de preocupación en el comité político del gobierno, especialmente por la magnitud humanitaria que podría desencadenar en la Región de Valparaíso.

Desde el interior de la toma, algunas dirigentas aseguran que se están preparando para todos los escenarios. "Estamos preparados para cualquier situación. Frente a esto, no bajaremos la guardia", afirma Ayala. En tanto, Elizabeth Rivera, dirigente de la primera cooperativa conformada en el cerro, sostiene que "seguiríamos en el ámbito legal para destimar la orden de desalojo", que está fechada para fines de agosto. ●